



SENTENCIA DE TUTELA 52-52-040-89001-2023-00014-00

Referencia:	Acción de Tutela
Radicación N°:	52-52-040-89001-2023-00014-00
Accionante:	Jaime Enrique Castillo Banguera
Accionado:	Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Nariño de Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal de Francisco Pizarro (N)
Vinculados:	Integrante Lista de elegibles conformado resolución 387 de junio 22 de 2023 para sede Francisco Pizarro (N)
Derechos vulnerados:	Derecho al Trabajo, Acceso a Cargos Públicos, a la Igualdad, no Discriminación y Confianza Legítima

Francisco Pizarro-Salahonda (N), diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2.023)

I. VISTOS

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA, identificado con C.C. 12.831.381 de Francisco Pizarro – Nariño, quien actúa a nombre propio, en contra de REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al TRABAJO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, NO DISCRIMINACIÓN Y CONFIANZA LEGÍTIMA.

II. ANTECEDENTES

El Accionante en su escrito tutelar, manifiesta que mediante Resolución No. 282 de 26 de mayo de 2.023, la Registraduría Nacional del Estado Civil, convocó al proceso de selección para proveer empleos de carácter supernumerario del nivel asistencial denominación Auxiliar Administrativo 512004, ofertándose ocho (8) vacantes para la sede de registraduría municipal de FRANCISCO PIZARRO, con la finalidad de apoyar el proceso de inscripción de ciudadanos para el proceso electoral de Autoridades Territoriales a realizarse el día 29 de octubre de 2.023 estableciendo unos requisitos y criterios de selección.

Refiere que pese a dichos criterios de selección en el cual solo se tendría en cuenta la experiencia de una fecha en específico, sin tener en cuenta el resto de experiencia que tenga el ciudadano con la entidad, decidió inscribirse bajo los términos de la convocatoria el día 1 de junio de 2023, a la espera de que se hiciera público el listado de inscrito con los días de experiencia, para hacer su reclamación.

Expresa que el listado de inscritos según la resolución No. 282 del 26 de mayo de 2.023 sería publicado el día 9 de junio de 2.023 en lugares visibles de cada registraduría Municipal que conforman la circunscripción de Nariño, manifestando que pese a estar pendientes de su publicación tanto en la sede municipal como en la página de la registraduría Nacional del estado civil, nunca fue publicado, por tal razón no le fue posible



con mayor antelación manifestar su descontento antes de que se hiciese público el listado preliminar.

Relata que, en el año 2022, en el mes de febrero, se abrieron convocatorias para proveer 12 cargos de personal supernumerario para las elecciones de Senado y Cámara, postulándose en esa ocasión, por contar con 52 días de experiencias adquiridas años atrás, haciendo parte del listado de elegibles, argumentando que algunas personas que poseían más experiencia y estaban dentro del listado, renunciaron a dicho cargo. Y, mediante la resolución No. 148 del 11 de febrero de 2022, se hizo pública la lista de elegibles en orden de acuerdo a los días de experiencia que cada uno poseía hasta esa fecha.

Comenta que, en ese entonces, su vinculación con la entidad duro 10 meses consecutivos los cuales se dieron mediante prorrogas mes a mes, sumando así esa experiencia con la entidad, adicional a la que ya tenía de años atrás al igual que otras personas que hicieron parte de ese proceso. Evidenciándose que también se estableció un criterio de selección discriminatorio, violatorio del derecho a la igualdad, al acceso a cargos públicos y derecho al trabajo, pues con ese criterio de selección se vetaba a quienes no hubiesen participado en las elecciones de consejos de juventudes, aunque tuvieran las capacidades y el conocimiento mucho más que algunos jóvenes que aún estaban faltos de experiencia.

Reitera que bajo esos criterios de selección la registraduría Nacional ha venido discriminando, excluyendo y negándole el derecho de trabajar a ciudadanos que por no cumplir con los criterios de selección que ellos determinen sin razón alguna, al rechazar la totalidad de la experiencia que tiene un ciudadano para contratar a personas con menos experiencia.

Refiere que estuvo atento a la publicación de la lista de inscritos con los días de experiencia que nunca se hizo pública, encontrándose que cuando se publicó la lista de elegibles preliminar, se encontró que se le había dejado por fuera de los elegibles, pero sí, están ingresando a personal que en relación a los días de experiencia con la entidad están por debajo de su promedio.

Argumenta que frente a su inconformidad presentó reclamación a la entidad, exponiendo las razones de su desacuerdo con el proceso de selección, esperando tener de la entidad una respuesta satisfactoria, que resolviera y aclarara todas sus dudas, obteniendo respuesta de la entidad el día 22 de junio de 2023, la cual manifiesta no resolvía ninguno de los requerimientos expresados en su petición.

Señala que previo a realizarse la publicación de lista de elegibles definitiva, interpuso recurso de reposición y apelación, con el fin de que se revisara a fondo su reclamación, y se respondieran los interrogantes planteados, considerando que tal información es de interés y carácter público, por tal debía darse respuesta a todos y cada uno de sus interrogantes.

Indica que, pese a que su recurso no había sido resuelto, la entidad hizo público el listado de elegibles definitivo, y hasta el momento de la presentación de esta tutela no ha habido ningún pronunciamiento al respecto.

Finalmente recalca que en el tiempo laborado en la entidad, en el periodo comprendido entre marzo hasta diciembre de 2022 (10 meses), sus funciones fueron desarrolladas conforme a lo solicitado por el superior jerárquico, argumentando que dada su denominación de supernumerario, se le negó la posibilidad de asumir otros roles y funciones, por no ser funcionario de confianza del superior jerárquico, considerando que se estaba violando el derecho a la confianza legítima contemplado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 1991.



Para concluir, comenta que posee experiencia en la entidad, teniendo mérito para estar dentro de los elegibles.

III. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

.- Por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Para el día 30 de junio de los cursantes, se allegó respuesta por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, quienes manifestaron que conforme lo establecido en el artículo 10° del decreto ley 1010 de 2000, la registraduría cuenta con dos niveles de la administración, para el cumplimiento de su misión institucional, el Nivel Central y el Nivel desconcentrado, relatando que este último está constituido por las dependencias de la Registraduría, cuyo nivel de competencias se ajusta a una circunscripción electoral específica o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la Registraduría Nacional del Estado Civil y se configura con observancia de los principios de la función administrativa.

Así las cosas, da a conocer que los Delegados Departamentales son los encargados del funcionamiento de todas las dependencias de la Registraduría Nacional a nivel seccional y conforme el artículo 33 del Código Electoral, y el artículo 19 del Decreto Ley 1010 de 2000, por tanto, los Delegados son los representantes en el territorio de su jurisdicción, y en consecuencia, se encargan directamente de los asuntos a los que llegue a conocer en su calidad de representante de la Registraduría en el territorio correspondiente, corolario a ello, refiere que dadas las atribuciones en comento, el Registrador Nacional del Estado Civil no tiene competencia para la satisfacción de las pretensiones aquí previstas ni para el cumplimiento de una eventual orden judicial, por tanto, quien tiene la competencia para conocer del presente tramite, es la DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL NARIÑO de la Registraduría Nacional del Estado Civil; quien deberá pronunciarse frente a lo pretendido.

Continuando con sus descargos, menciona que la acción de tutela es una institución que debe cumplir con el principio esencial de SUBSIDIARIEDAD que, para el caso en concreto no se cumple, pues el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, como lo es EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, concluyendo que, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que pretende cuestionar con la presente acción de tutela, es ante la JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; por lo tanto, solicita se declare la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela para el caso en concreto y su desvinculación.

Finalmente, se allega soporte de publicación en página web de la registraduría del presente tramite tutelar en cumplimiento a la orden emanada de este despacho judicial.

.- Por parte de la DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Previas consideraciones legales y jurisprudenciales respecto de la acción de tutela, así como las generalidades de la misma y del principio de subsidiariedad, y el debido proceso para la provisión de empleos públicos, frente al último tópico, comenta que en sentencia C-588 de 2009 la Honorable Corte Constitucional afirmó que en el desarrollo de un concurso público de méritos *"cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos"*, por tanto, las reglas del concurso son invariables, manifestación que ha sido reiterada por el Máximo tribunal en la sentencia SU-913 de 2009 señalando lo siguiente: *"...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras*



de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.", so pena, de afectar principios básicos de la entidad, así como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular.

Bajo estos argumentos, refiere que, los criterios de selección establecidos en la Resolución No. 282 de 2023, obedecieron a los criterios postulados por las Resoluciones Nos. 25542 de 2022 y 10110 de 2023, por las cuales se reglamentó el trámite para la inscripción de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes en Colombia, para las elecciones de autoridades territoriales, se estableció un procedimiento ágil y eficaz para la vinculación del personal supernumerario en aras de apoyar el proceso de inscripción de ciudadanos para tal evento electoral, dando prevalencia siempre el conocimiento actualizable del personal convocado.

Comenta que el criterio de selección previsto en la convocatoria 282-2023, en ningún momento impidió el acceso al concurso, únicamente, permitió disponer de un personal con un conocimiento más fresco y actual de los procesos electorales que se vienen adelantando, dada la innovación tecnológica que en los mismos se está aplicando, motivo por el cual, el requisito de experiencia se enfocó desde el mes de enero de 2019 hacia adelante dadas las características similares del proceso electoral que se avecina.

Relata que la Resolución No. 335 del 14 de junio de 2023, fue emitida acorde a lo que establece la Constitución Política de Colombia, cuyo objetivo primordial fue el de propender por la defensa del principio del mérito como criterio de escogencia de los servidores públicos, recalcando que todas las acciones encaminadas por la Entidad, han respetado el principio del debido proceso, en cuanto a publicidad y defensa de los derechos de los aspirantes.

Frente al caso específico, da cuenta que la entidad, una vez surtido el proceso establecido en la convocatoria, procedió a consolidar la lista de elegibles, siendo un acto administrativo de carácter particular que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso, con un carácter obligatorio para la administración, así mismo, refiere que con la conformación de la lista o registro de elegibles, en el presente caso, se materializó el principio del mérito del artículo 125 de la Constitución, en la medida en que, con él, la Entidad proveyó los cargos convocados, refiriendo que el accionante hace parte de la lista de elegibles y, en el momento en que alguno de los postulantes no acepte el cargo, el mismo puede ser escogido para cubrir tal vacante, siempre respetando el orden en que se vaya cubriendo dichas vacantes.

Así las cosas, menciona que la Entidad no ha obrado en contra del principio de confianza legítima que les asiste a los elegibles, sino que ha actuado con el respeto que se le ha dado al proceso de expedición de los diferentes actos administrativos de la convocatoria y expedición de lista de elegibles, preliminar y definitiva, junto con la publicidad de los mismos.

Informa que al accionante se le han respetado todos sus derechos, pues se ha dado respuesta oportuna a cada una de las reclamaciones por él instauradas, dando a conocer el Oficio No. 1405 del 22 de junio de 2023, por medio del cual se atendió de manera oportuna y de fondo a la reclamación por el incoado ante la Oficina de Talento Humano de la Delegación Departamental de Nariño, así como el Oficio No. 1460 del 28 de junio, a través del cual, se dio respuesta al recurso de reposición incoado por el accionante frente al acto administrativo No. 1405 del 22 de junio de 2023.

Por tanto, solicita se declare la improcedencia de la Acción de Tutela por los hechos expuestos de manera previa.



Finalmente remite soporte de notificación efectuada vía correo electrónico a todos los integrantes de la lista de elegibles de la convocatoria 282 de 2023, para el cargo de supernumerario nivel asistencial, correspondiente al municipio de FRANCISCO PIZARRO, en cumplimiento de lo dispuesto por este estrado judicial.

.- Por parte de la REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE FRANCISCO PIZARRO

Vía correo electrónico de fecha 5 de julio de 2023, se allega respuesta manifestando que es la Delegación Departamental de Nariño en cabeza del señor delegado Dr. **Manuel Ricardo Rúales Realpe** encargado de los dos despachos, quien brinda respuesta en calidad de nominador de la convocatoria.

.- Por parte de los INTEGRANTES DE LA LISTA DE ELEGIBLES DE LA CONVOCATORIA 282 DE 2023.

Pese a la notificación realizada a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles de la convocatoria 282 de 2023, por parte de la registraduría nacional del estado civil, no se obtuvo ningún pronunciamiento al respecto.

IV. DE LAS PRUEBAS

Obran como pruebas relevantes para establecer si se da o no la vulneración o amenaza al derecho fundamental ya mencionado, las siguientes:

Por parte del accionante:

1. Copia de documento de identificación del accionante.
2. Copia de comprobante de inscripción al proceso convocado.
3. Copia cronograma de la convocatoria 282 de mayo de 2023
4. Copia de pagina 1 y 2 de Resolución 148 de febrero 11 de 2022
5. Copia de Derecho de Petición de fecha 20 de junio de 2023 presentado a la entidad a modo de reclamación.
6. Soporte de radicación ante Registraduría municipal de Francisco Pizarro
7. Copia del Oficio No. 001405 del 22 de junio de 2023, por medio del cual se dio respuesta oportuna y de fondo a la reclamación por el incoada ante la Oficina de Talento Humano de la Delegación Departamental de Nariño.
8. Recurso de Reposición de fecha 22 de junio de 2023, presentado manifestando su desacuerdo a la respuesta de la reclamación.

Por parte de la parte accionada:

1. Copia de la Resolución 282 de mayo de 2023 por la cual se adelanta la convocatoria para la vinculación del personal supernumerario nivel asistencial.
2. Copia resolución 335 de junio 14 de 2023 por medio de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer 08 empleos de supernumerario en la registraduría Municipal de Francisco Pizarro
3. Copia de Resolución 378 de junio 14 de 2023 por medio de la cual se conforma la lista de elegibles preliminar para proveer 991 empleos de carácter supernumerario de la circunscripción electoral de Nariño
4. Copia de Resolución 387 de junio 22 de 2023 por medio de la cual se conforma la lista de elegibles definitiva para proveer 991 empleos de carácter supernumerario de la circunscripción electoral de Nariño.
5. Copia del Oficio No. 001405 del 22 de junio de 2023, por medio del cual se dio respuesta oportuna y de fondo a la reclamación por el incoada ante la Oficina de Talento Humano de la Delegación Departamental de Nariño.



6. Copia del Oficio No. 001460 del 28 de junio, a través del cual, se dio respuesta al recurso de reposición incoado por el accionante frente al acto administrativo No. 001405 del 22 de junio de 2023.

V. DE LA COMPETENCIA

Este Despacho es competente para dar trámite y resolver la acción de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículo 86 y en el Decreto 2591 de 1991, artículo 37 y demás normas concordantes.

VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Judicatura dilucidar en esta oportunidad, en primera instancia, si la acción de tutela resulta procedente o no, para posteriormente entrar a definir si la Registraduría Nacional del Estado Civil, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, con la expedición de la Resolución No. 282 del 26 de mayo de 2023, por la cual se convoca al proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial y de la Resolución 387 de junio 22 de 2023 por medio de la cual se conforma la lista de elegibles definitiva para proveer 991 empleos de carácter supernumerario de la circunscripción electoral de Nariño.

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

7.1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA

Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, toda persona podrá incoar la acción de tutela para reclamar ante los Jueces de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la Ley, y procede solo cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Convirtiendo este mecanismo en una herramienta subsidiaria o residual.

Al respecto cabe precisar que, le compete a esta Judicatura previo estudio de la situación puesta a su consideración para protección constitucional, así como la valoración de los medios de prueba aportados en el trámite tutelar, realizar un análisis sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa judicial, sin limitarse a establecer si dicho medio puede resolver con prontitud el conflicto, pues de ser así, este mecanismo constitucional en atención a los principios y términos dispuestos para adoptar una decisión, desplazaría por completo las demás jurisdicciones y acciones que la ley ha determinado, desvaneciendo la figura constitucional de la tutela y la finalidad para la cual fue constituida.

En este sentido, se debe mencionar que el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, previó lo siguiente:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto (...)”



Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que la tutela opera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, bajo los siguientes términos:

“Esta Corporación ha considerado desde sus primeras decisiones que el perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir no existirá forma de reparar el daño. La gravedad de los hechos debe ser de tal magnitud que haga impostergable la tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos; además, debe resultar urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en que se encuentra.”

De contera que, este mecanismo de protección tiene un carácter exceptivo, es decir, sólo puede acudir a ella cuando no existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De ahí su naturaleza restrictiva o subsidiaria o residual, ya que la tutela, no ha sido consagrada para reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni fue constituida como una alternativa, o una instancia acumulativa o complementaria a los demás mecanismos dispuestos por la ley.

Es así que, para determinar la procedencia de la acción de tutela se debe tener en cuenta como presupuesto fáctico no solo la acción u omisión de la autoridad pública, el cual debe ser objeto del juicio constitucional por parte del Juez para determinar si con ellas se ha violado, viola o amenaza cualquier derecho fundamental constitucional, aunado la actual, grave e inminente o directa violación del derecho fundamental, pues como se sabe, **el ordenamiento jurídico está dispuesto para atender todos los reclamos a los derechos de manera general u ordinaria, encontrando que este mecanismo constitucional opera como una herramienta subsidiaria ya que, si existe otro mecanismo ordinario y sólo procederá la acción de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable al derecho fundamental.**

Por su parte, la sentencia T-215 a /2.011 la H. Corte Constitucional, puntualizó:

“...La Corte Constitucional ha reiterado en diversas oportunidades que “en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional”. (Negrilla fuera del texto).

“En conclusión, la acción de tutela sólo procede cuando no existen mecanismos judiciales alternos de defensa, de manera que es necesario agotar previamente los mecanismos ordinarios para acceder a ella, en virtud de que el cumplimiento de las normas y la obtención de los derechos no siempre son vía tutela, sino que para cada uno de ellos, existen normas de carácter sustantivo para su reconocimiento y procesales que indican la forma de reivindicarlos”.

Finalmente, en la Sentencia SU -1070 de 2003, la Corte manifestó lo siguiente:

“3.2. En los eventos en que el ordenamiento jurídico tenga previsto un mecanismo ordinario de defensa judicial, la jurisprudencia constitucional tiene definido que el juez de tutela tendrá en cuenta, a partir de las consideraciones especiales del caso, dos aspectos a saber: 1º) la eficacia e idoneidad del medio de defensa judicial; y, 2º) los elementos del perjuicio irremediable.

El medio ordinario de defensa judicial debe ser eficaz e idóneo para el amparo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Tal grado de eficacia se aprecia en concreto, en atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante y de los derechos constitucionales involucrados.

Para la Corte, “La necesidad de tener presente las circunstancias concretas y los derechos constitucionales involucrados, a efectos de analizar la eficacia del otro medio de protección judicial, explica el carácter subsidiario de la acción de tutela,



que impone establecer si el ordenamiento jurídico no ha dispuesto un remedio judicial idóneo y específico para proteger el derecho. Por lo mismo –carácter subsidiario–, la tutela no tiene por objeto desplazar los diversos mecanismos de protección, sino fungir como último recurso –y, por lo mismo, sin restricciones normativas distintas a las normas constitucionales– para lograr la protección de los derechos fundamentales. La forma en que se han desconocido o puesto en peligro los derechos fundamentales, puede indicar la no idoneidad de los mecanismos ordinarios”.

Así las cosas, atendiendo la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo tutelar, quien busque debatir un acto administrativo por vía judicial, debe acudir a las acciones dispuestas para tal fin en la jurisdicción contencioso administrativa, como lo son la pretensión de simple nulidad o la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, que puede ir acompañada de una solicitud de medida de suspensión provisional del acto administrativo al considerarlo lesivo de las prerrogativas constitucionales.

En desarrollo de ese mandato, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela no procede contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues no es el mecanismo adecuado para controvertir ese tipo de actos, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable o que los medios ordinarios de defensa no resulten idóneos y eficaces. La objetividad de esta causal de improcedencia se fundamenta en el hecho de que la estructura del ordenamiento jurídico prevé acciones propias de competencia de un juez especializado que proporcionan todas las garantías a los implicados para controvertir actos de esta índole, pues siendo el rol o la controversia con la administración, hay base jurídica para la oposición de su voluntad por intermedio de los trámites que señala el Estatuto de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, en esta instancia cabe traer a colación la Sentencia T-425 del 26 de abril 2001 se pronunció en los siguientes términos:

“En un sinnúmero de ocasiones esta colegiatura ha sostenido que procede la tutela para enervar los actos de las autoridades públicas cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en los concursos públicos. En efecto: la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera cuando no son designadas pese al hecho de haber obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho fundamental que requiere protección inmediata.

De otra parte, la Corte en la Sentencia SU-613 del 6 de agosto de 2002, reiteró esta posición:

“... existe una clara línea jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el mecanismo idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la administración judicial de conformidad con los resultados de los concursos de méritos, pues con ello se garantizan no sólo los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino también el acceso a los cargos públicos, y se asegura la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución. Por lo mismo, al no existir motivos fundados para variar esa línea, la Sala considera que debe mantener su posición y proceder al análisis material del caso. Obrar en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella se vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios en defensa de sus derechos.”

7.2 DERECHO AL TRABAJO

En relación con este derecho la Alta Corporación recalcó lo siguiente:

“La jurisprudencia constitucional ha considerado que la naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. En palabras de la Corporación la “lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante



del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social.”¹

7.3 DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso resulta aplicable para todas las actuaciones judiciales y administrativas. Frente a este derecho fundamental la Corte Constitucional ha precisado:

“...el derecho fundamental al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”. Del mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental supone que todas las autoridades judicial y administrativas, dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Bajo esta premisa el derecho al debido proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las autoridades públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en procura de la garantía de los derechos de los administrados.”²

7.4 DERECHO A LA IGUALDAD

Frente al derecho a la igualdad la Honorable Corte Constitucional en su diversa jurisprudencia ha establecido lo siguiente:

“La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos contruidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”³

Por lo anterior, al alegar la violación del derecho a la igualdad por parte del accionante, supone demostrar que, pese a estar en la misma situación fáctica o jurídica que otras personas, se ha recibido un trato diferente, pues no resulta válido afirmar que se ha recibido un trato desigual, cuando no hay una situación concreta de la que puede inferirse tal manifestación.⁴

¹ Sentencia C-594 de 2014

² Sentencia T-597 de 2011

³ Sentencia T-030 de 2017

⁴ Sentencia T-809 de 2006



7.5 GENERALIDADES SOBRE LA FORMA DE PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS, REGLAS SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA Y REQUISITOS DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

El artículo 125 de la Constitución Política, indica que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, exceptuando expresamente de la misma los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, a los trabajadores oficiales y los demás que determine la Ley.

Aunado a ello, establece que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la ley, serán nombrados por concurso público; el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la importancia del sistema de carrera administrativa así:

“La importancia de la carrera administrativa como pilar del Estado Social de Derecho, se puso de relieve por esta Corporación en la sentencia C-588 de 2009, al declarar la inexecutable del Acto Legislativo No 01 de 2008, que suspendía por el término de tres años la vigencia del artículo 125 constitucional. En el mencionado pronunciamiento se indicó que el sistema de carrera administrativa tiene como soporte principios y fundamentos propios de la definición de Estado que se consagra en el artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a cargos públicos y el debido proceso.”⁵

En igual sentido ha determinado lo siguiente:

“El mérito como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la administración y que consiste en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación, en que el Estado pueda “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública”. Igualmente, el mismo precepto establece que el mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso público. En los términos de este artículo: “Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.”

A partir de este precepto, se analizan diversos aspectos de trascendencia para el desempeño de un empleo público, tales como las calidades académicas, experiencia y las demás competencias requeridas. De esta forma al legislador establece los requisitos o criterios de ingreso y ascenso de un cargo público, así: 1) **Requisitos objetivos:** Orientados a evaluar la capacidad profesional o técnica del aspirante. Este requisito se demuestra con los exámenes de conocimiento, acreditación de años de experiencia, ausencia de antecedentes penales o disciplinarios, etc. 2) **Requisitos subjetivos:** Que permiten verificar las calidades personales y la idoneidad moral del candidato. Este requisito se demuestra a través de factores como la evaluación sobre su capacidad para relacionarse con los demás, entre otros. Si bien es cierto, en esta oportunidad no se trata de un concurso para acceder a la carrera administrativa, se deben aplicar los parámetros anteriores teniendo en cuenta que el mismo gira entorno a adelantar un proceso de méritos para ocupar un cargo público de manera transitoria.

Finalmente, en la misma línea jurisprudencial, respecto de la convocatoria a concurso de méritos ha mencionado que es:

“la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados concursantes. Por tanto, como en ella se delimitan los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los

⁵ SU-446/11 corte Constitucional



***principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento.** La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.” (subrayado y negrilla fuera de texto)*

En este sentido la Honorable Corporación en sentencia T-256 del 12 de junio de 2008, señaló:

“En sentencia T- 256 de 1995, la Corte Constitucional señaló claramente la necesidad de respetar las bases del concurso: “... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla.”

7.6. PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-

Frente al principio de confianza legítima la H. Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto manifestando que:

“La corrección de las actuaciones administrativas y los recursos de reposición y apelación, que se emplean en el curso de las actuaciones administrativas, les brindan a aquellas la oportunidad de ajustar sus actuaciones a las normas pertinentes. Son mecanismos de autotutela, en los cuales la propia Administración sujeta, bien sea de manera rogada o espontánea, sus determinaciones a los dictados del ordenamiento. Cuando ello no ocurra, los administrados podrán recurrir a los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, que ponen en marcha el funcionamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este engranaje de instituciones, administrativas y judiciales, depura los actos de la Administración de desaciertos e infracciones al ordenamiento.”

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, menciono que:

“Como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada en el caso concreto. Ello implica que no toda realidad creada, consentida o tolerada por las autoridades permite la aplicación de este principio. En aquellos supuestos en los que se presenta una discordancia entre los dictados del derecho y el obrar de la Administración, resulta completamente inaplicable. En la medida en que es un instrumento de racionalización del poder público, que pretende satisfacer las expectativas de fiabilidad y coherencia de los administrados, la confianza legítima no puede ser argüida con el propósito de que la Administración persevere en errores precedentes o en la violación de los principios del texto superior.”⁶

⁶ Sentencia SU-067-22



VIII. CASO CONCRETO

Conforme las consideraciones previamente expuestas, y descendiendo al caso sub examine, de la lectura del escrito tutelar, el despacho encuentra que las inconformidades del accionante giran en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a cargos públicos, debido proceso, igualdad y confianza legítima, tras ocupar el 10 lugar en lista de elegibles conformada mediante resolución 387 de junio 22 de 2023, y no lograr acceder a una de las 8 vacantes ofertadas para la sede de la registraduría del MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, por no contar con el tiempo de experiencia requerido para el cargo convocado.

Al respecto, considera que los requisitos de selección establecidos eran discriminatorios, pretendiendo a través del presente mecanismo constitucional, se ordene su inclusión dentro del listado de elegibles conformado mediante resolución 387 de junio 22 de 2023, sin perjuicio alguno de la participación de los demás integrantes de la lista de elegibles, solicitando su nombramiento en el cargo de secretaría, el cual presuntamente, quedaría vacante tras la posible renuncia de quien ocupa dicho cargo dada la participación de uno de sus familiares en las próximas elecciones, solicitando le sea asignada de acuerdo a los méritos, capacidades, experiencia y conocimientos adquiridos. Aunado a ello, solicitó se ordene a los accionados computar el tiempo total de su experiencia desde el inicio de su labor como funcionario de la entidad sin ser rechazada o desmeritada por el simple hecho de establecer criterios de selección que van en contravía de los derechos constitucionales.

Cabe mencionar, que frente a la solicitud de recepción de testimonios de los participantes que se consideraran afectados con la determinación asumida por la REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL con la expedición de dichos actos administrativos, se determinó por esta judicatura enterar a todos y cada uno de los integrantes de la lista de elegibles, para que se pronunciaran frente a la tutela, expresando su inconformidad con la misma o con el proceso adelantado, no obstante a la fecha no se allegó ningún pronunciamiento por parte de los mismos, garantizándoles así su derecho de defensa y contradicción.

Por su parte la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, tanto del nivel nacional como la delegación departamental de Nariño, se pronunciaron frente al escrito primigenio, argumentando que no se ha vulnerado los derechos fundamentales del tutelante, no obstante, refiriendo que ante su inconformidad cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir los actos administrativos en comento, tal como lo es el medio de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa dispuesta para tal fin, solicitando en consecuencia, se declare la IMPROCEDENCIA de la presente acción de tutela por ser este un mecanismo subsidiario y residual.

Bajo estos argumentos, el despacho dispuso el análisis correspondiente, para decretar la procedencia de la acción de tutela en esta oportunidad, y pese a no haberse logrado determinar la conjuración de un perjuicio irremediable, por cuanto, debió acreditarse probatoriamente la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional, no es menos cierto, que el mecanismo dispuesto por la vía judicial ordinaria, no resulta idóneo y si tardío, dado el tiempo que tarda para tomarse una decisión de fondo en esta clase de asuntos, máxime cuando el periodo para ejercer los cargos ofertados dan inicio el 14 de julio de los cursantes, de tal suerte que podría hacerse ilusoria la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pues pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de acceso a los cargos públicos incoados por el accionante, encontrando así superado en primera instancia el requisito de subsidiariedad del presente mecanismo constitucional, en consecuencia, es procedente entra a analizar acorde al problema jurídico planteado si las entidades accionadas, vulneraron los derechos fundamentales esgrimidos por el tutelante.

Así las cosas, una vez superado el requisito de subsidiariedad respecto de la procedencia del mecanismo de tutela, por tornarse ineficaz, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados, es oportuno, entrar a analizar las pretensiones y argumentos del hoy tutelante.



Ahora bien, una vez analizado el petitum del accionante, y revisado el acervo probatorio existente en el plenario, se observa que mediante acto administrativo Resolución No. 282 de mayo 26 de 2023, emanado del DELEGADO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN NARIÑO, encargado de los dos despachos, en ejercicio de las atribuciones legales conferidas, en especial las contenidas en el artículo 33 del decreto 2241 de 1986, y atendiendo el calendario electoral para las elecciones de Autoridades Territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles o miembros de Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 29 de octubre de 2023, dispuesto conforme Resolución No. 28542 del 20 de octubre de 2022, se decidió CONVOCAR al proceso de selección para la provisión de unos empleos de supernumerarios nivel asistencial, por el período comprendido del 4 a 14 de julio de 2023 inclusive, en la Circunscripción Electoral de Nariño.

Así mismo, encuentra la judicatura que conforme lo expuesto por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA en su escrito inicial, él estaba consciente de los criterios de selección previstos desde un principio, y pese a ello decidió inscribirse a la convocatoria, aceptando los términos allí establecidos, con la “expectativa” de presentar una posterior reclamación.

En esta oportunidad, considera oportuno el despacho retrotraerse a lo ya expresado de manera previa en apartes considerativos de la presente decisión, manifestando que la honorable Corte Constitucional en sentencia de unificación respecto de la convocatoria para concurso de méritos ha establecido que esta es: “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados concursantes. Por tanto, como en ella se delinear los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento.

Por tanto, denota este juzgador que el concurso de méritos convocado por la DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, desde el momento de su publicación, determinó de forma clara y específica la forma en que se desplegaría cada una de las etapas previstas, así como el cronograma y agenda de las fechas en que se surtiría cada una de ellas, en igual sentido, se determinó el perfil e identificación del cargo, la modalidad para presentar reclamaciones, los criterios de selección, y forma de calificación entre otros aspectos atinentes a la convocatoria. Así mismo, se encuentra que la misma fue publicada en la página oficial de la entidad y durante el desarrollo del concurso, se le dio oportunidad a cada uno de los participantes de ejercer sus derechos a reclamar las decisiones y obtener respuesta como ocurrió con el accionante, a quien se resolvió su petición de inconformidad y los recursos propuestos dentro de los términos legalmente establecidos, pronunciamientos que no necesariamente deba resultar favorable a las pretensiones del reclamante.

En igual sentido, se encuentra que, a diferencia de lo manifestado por el accionante, el mismo no ha sido excluido de la lista de elegibles, tal como se observa en la resolución 387 de junio 22 de 2023, pues el mismo se encuentra ubicado en la posición No. 10 de un total de 20 personas que conforman la lista para la sede municipal de FRANCISCO PIZARRO, en atención a la experiencia requerida dentro de los criterios de selección, aunque no consiguiera ocupar una de las 08 vacantes ofertadas, lo que no es óbice, para que en algún momento en que alguno de los postulantes no acepte el cargo, el mismo puede ser escogido para ocupar dicha vacante, respetando el orden de mérito, tal como lo afirmó la Delegación Departamental de Nariño en su contestación.

Por otra parte, frente a las pretensiones del señor JAIME CASTILLO BANGUERA, de que sea nombrado en el cargo de secretaria, acorde a su experiencia, mérito, capacidades y conocimientos adquiridos, no es aplicable al presente caso, toda vez que la misma es una mera expectativa, y el cargo mentado no fue convocado para su provisión, en consecuencia, no es dable hacer uso de lista de elegibles para proveer cargos que no fueron ofertados, en garantía de la buena fe y confianza legítima de los administrados y de los participantes de dicha convocatoria, pues bajo este entendido, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso e igualdad respecto de los demás integrantes de la lista de elegibles, al proveer dicho cargo sin haberse surtido el proceso de selección respectivo bajo la normatividad legal vigente.



Al respecto, el máximo tribunal constitucional también ha señalado que:

*“la lista o registro de elegibles tiene dos cometidos, el primero, que se provean las vacantes, los encargos o las provisionalidades para las cuales se convocó el respectivo concurso y no para otros, porque ello implicaría el desconocimiento de una de las reglas específicas de aquel: el de las plazas a proveer. El segundo, que, durante su vigencia, la administración haga uso de ese acto administrativo para ocupar sólo las vacantes que se presenten en los cargos objeto de la convocatoria y no otros.”*⁷

Cabe reiterar entonces, que la Corte Constitucional al respecto ha expresado que las reglas del concurso son invariables y así lo manifestó en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar *“...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.”*

De lo expuesto entonces, se puede concluir que, no existe vulneración a los derechos hoy invocados, primordialmente el debido proceso, el cual como se desprende del palmario fue debidamente respetado y adelantado por parte de la entidad accionada al desplegar las actuaciones ajustadas a la ley y a las reglas previstas en el desarrollo de la convocatoria. En igual sentido, se encuentra que no hay vulneración respecto del derecho a la igualdad, más aun, cuando no solo no puede aplicarse el criterio reclamado, sino que, además el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA, decidió participar de dicha convocatoria, pese a no estar conforme con los criterios de selección establecidos, pretendiendo se modifique el listado a su arbitrio y en su beneficio, a través del mecanismo de tutela, pretendiendo que se le designe en un cargo que ni siquiera fue convocado mediante el acto administrativo objeto de discusión, situación que de accederse podría poner en riesgo de vulneración los principios de buena fe y confianza legítima de los demás participantes y elegibles.

Al respecto, se resalta jurisprudencialmente, que la convocatoria del concurso de méritos es la directriz para el desarrollo idóneo del mismo, y la lista de elegibles, al ser parte de dichas pautas puede ser usada para proveer cargos dentro de la entidad **siempre y cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación**. Dicha interpretación se ha mantenido incólume a lo largo de la jurisprudencia constitucional. La mayor ilustración acerca de estos principios reposa en las sentencias C-319 de 2010 y T-294 de 2011, donde se recalca que proveer vacantes dentro de una entidad a partir de la lista de elegibles frente a cargos de denominación y grados iguales, no es una mera facultad del nominador sino un deber de este, y en caso de que, los cargos sean de diversa naturaleza, el uso de la lista de elegibles si es facultativa. No obstante, la petición del tutelante no es viable por cuanto el cargo al que aspira, no tiene determinado si el perfil, denominación y grado es similar o igual al ofertado en la convocatoria 282 de mayo 26 de 2023.

Conforme la Ley 909 del 2004, el concurso de méritos sustancialmente tiene cuatro etapas: la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de las pruebas y la elaboración de la lista de elegibles. Así mismo, ha expresado en sus apartes que las listas de elegibles son definitivas, inmodificables y vinculantes para la Administración, por ser actos administrativos de contenido particular que crean derechos subjetivos y expectativas legítimas para los aspirantes que la conforman, dependiendo del puesto que ocuparon.

Por lo anterior, a diferencia del elegible que ocupó el primer puesto quien por mandato constitucional tiene un verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente, los demás aspirantes que integran la lista solo tienen **una mera expectativa de ser nombrados** en caso de que los aspirantes que ocuparon un puesto superior no acepten sus nombramientos.

Corolario a ello, el tutelante no aportó ningún material probatorio que acredite sumariamente, ni pueda colegirse de lo narrado en sede constitucional, que él o su núcleo familiar, estén ad portas de sufrir algún perjuicio irremediable, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, por lo que se procederá a DENEGAR el amparo constitucional deprecado.

⁷ Sentencia SU-446/11



A efectos de enterar de la presente decisión a las personas vinculadas al presente tramite, este Juzgado impondrá la carga de su notificación a la **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, a efectos de que dicha entidad **publique en su respectiva página web y notifique vía correo electrónico la presente decisión** a todas las personas que componen el listado de elegibles conformado mediante resolución 387 de junio 22 de 2023 para sede de la registraduría municipal de FRANCISCO PIZARRO (N).

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N)**, administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

PRIMERO. - DENEGAR la presente acción de tutela interpuesta por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA identificado con C.C. 12.831.381 de Francisco Pizarro, en contra de la **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N)**.

SEGUNDO. - Si no fuere impugnada esta sentencia, envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión, en el término establecido por la ley de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Cumplido lo anterior archívese lo actuado.

TERCERO. - Notifíquese esta sentencia a las partes y vinculados, en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Ordénese a la **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, efectuar la publicación del presente fallo en su respectiva página web y notificar vía correo electrónico la presente decisión a todas las personas vinculadas que componen el listado de elegibles conformado mediante resolución 387 de junio 22 de 2023 para sede de la registraduría municipal de FRANCISCO PIZARRO (N)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MANUEL WILSON VILLARREAL AREVALO
JUEZ